En Logroño, a 13 de mayo de 2010, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido en su sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert Pérez-Caballero, y de los Consejeros D. Antonio Fanlo Loras, D. Pedro de Pablo Contreras, D^a M^a del Carmen Ortiz Lallana y D. José María Cid Monreal, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, y siendo ponente D. Antonio Fanlo Loras, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

42/10

Sobre el expediente remitido por el Excma. Sra. Consejera de Servicios Sociales, relativo al recurso extraordinario de revisión presentado por D^a I. G. H. contra la Resolución de fecha 26 de octubre de 2009, de la referida Consejera, por la que se inadmitió el recurso de alzada presentado por la interesada contra la Resolución de la Directora General de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales, de 14 de julio de 2009, de reconocimiento de su situación de dependencia (Grado I. Dependencia moderada y Nivel I).

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El 17 de junio de 2009, con registro de entrada del 23 de junio siguiente, D^a I. G. H., en modelo oficial, presentó solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, desarrollado por el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.

Adjuntó a su solicitud, además de la documentación requerida por el modelo oficial y relacionada con su situación personal (Documentos 1 al 11, folios 1 al 37), diversos informes técnicos de Psiquiatras, Psicólogos y Médicos sobre su estado de salud; y una copia de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de los de Logroño, por la que, con fecha 31 de marzo de 2009 (esto es, más de dos meses antes de iniciar el procedimiento de reconocimiento de su situación de dependencia), se declaró a D^a I. G. H., en situación de:

“Incapacidad permanente absoluta, con origen en enfermedad común”, condenando al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social al pago de una pensión vitalicia y mensual de 1.101,37 euros, más los incrementos legales correspondientes, con efectos desde el día 23/07/2008, descontándose las cantidades percibidas en los períodos de incapacidad, así como de prestación de servicios o percepción de subsidios compensatorios de salarios”.

Mediante esta Sentencia, se estimó, pues, la demanda de la interesada contra la referida entidad gestora, que declaró, mediante Resolución de 5 de octubre de 2008, que no se encontraba afecta de *“invalidéz permanente en grado alguno”*.

En el expediente, se ha incorporado, asimismo, el Anexo III (relativo a los Informes de Salud y Social, valoración de su situación de dependencia de 10 de julio de 2009; la Resolución con el dictamen de valoración de 14 de julio de 2009, en la que se asigna la calificación de **Grado I, Nivel 1**, indicando, en cuanto a los cuidados precisos, los *“de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal”*; la Propuesta de resolución de la Directora del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia de esa misma fecha; y la Resolución de la Directora General de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales, de la idéntica fecha, de reconocimiento del **“Grado I. Dependencia moderada y Nivel 1”**, señalándose, en aplicación de las disposiciones legales correspondientes, que *“la efectividad del derecho a las prestaciones correspondientes a su **Grado I. Dependencia Moderada y Nivel 1** se ejercitará a partir del 1 de enero de 2013”*.

La referida Resolución, susceptible de recurso de alzada en el plazo de un mes, fue notificada a la interesada el 21 de julio de 2009, según consta en el folio 58 del expediente.

Segundo

D^a L. S. A. interpone, mediante envío certificado en Correos el 25 de agosto de 2009 y registrado de entrada el 27 de agosto siguiente, un recurso de alzada contra la citada Resolución de 14 de julio de 2009, por la que se le reconoce una dependencia de **Grado I, Dependencia moderada, Nivel 1**, al entender: i) que *“el Grado otorgado no es el que me corresponde atendiendo a las circunstancias concurrentes en mi persona”*; y ii) que la justificación y prueba para obtener otro grado de dependencia radica en los informes médicos emitidos con fecha de marzo de 2009, en el estudio de pruebas y evaluación psicológica, así como en el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta, declarada por el Juzgado de lo Social, núm. 3 de los de Logroño.

Vuelve a adjuntar diversos documentos acerca de su estado de salud y copia de la Sentencia referida (folios 61 a 82).

Tercero

El 26 de octubre de 2009, la Excm. Sra. Consejera de Servicios Sociales, previa la Propuesta correspondiente, inadmite el recurso de alzada por extemporáneo, dado que el plazo para la interposición finalizaba el 21 de agosto y tuvo entrada en el Registro del órgano competente para resolver el 27 de agosto. La inadmisión fue notificada a la interesada el 5 de noviembre de 2009.

Cuarto

D^a I. G., mediante escrito registrado de entrada el 10 de diciembre de 2009, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la Resolución de 14 de julio de 2009, de reconocimiento de dependencia **Grado I, Dependencia Moderada, Nivel 1**, en cuanto *“se ha cometido un **error** en la valoración de la discapacidad de esta parte, que se desprende de los propios documentos incorporados al expediente, por lo que se solicita la revisión y estudio de mi solicitud”*. Alega que su estado de salud es tan deficiente que le han reconocido la incapacidad permanente absoluta, de la que *“se desprende el **error** cometido en este expediente en la valoración de mi grado de dependencia”*. Acompaña diversa documentación, ya aportada en anteriores ocasiones (folios 93-115).

Quinto

El 26 de enero de 2010, la Directora del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia eleva Propuesta de resolución por la que se desestima el recurso extraordinario de revisión, al entender que no ha habido error en los actos de reconocimiento de la situación de dependencia, habiéndose aplicado correctamente el baremo de valoración de dependencia, del que resulta la situación de **Grado I, Nivel 1**, por haber obtenido 37 puntos, de acuerdo con el Baremo de Valoración previsto en el R.D. 504/2007, de 20 de abril.

Sexto

La referida Propuesta es remitida, para informe, a los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja, que informan favorablemente la desestimación del recurso, mediante informe de 25 de marzo de 2009.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 30 de marzo de 2010, registrado de entrada en este Consejo el 13 de abril de 2010, la Excm. Sra. Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja remite al Consejo Consultivo de La Rioja, a través de su Presidente y para dictamen, el expediente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 13 de abril de 2010, registrado de salida el 14 de abril de 2010, el Sr. Presidente del Consejo Consultivo procedió, en nombre del mismo, a acusar recibo de la consulta, a declarar, provisionalmente, la misma bien efectuada, así como la competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero señalado en el encabezamiento, la correspondiente ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la sesión del Consejo Consultivo, convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del Dictamen del Consejo Consultivo y su ámbito

El presente procedimiento se incoa como consecuencia de la interposición, por la Sra. Sánchez Arquero, de un recurso extraordinario de revisión contra las Resoluciones administrativas mencionadas en el cuerpo del presente Dictamen. Con este planteamiento, resultaría de aplicación lo dispuesto en nuestra Ley reguladora 3/2001, de 31 de mayo, que, en su artículo 11.f), establece el carácter preceptivo de nuestro dictamen en los casos de *“revisión de oficio de los actos administrativos y con los efectos previstos en la legislación vigente y, en los mismos términos, los recursos administrativos de revisión”*.

Igualmente, el artículo 12.2.f) del Decreto 8/2002, de 24 de enero, que aprueba nuestro Reglamento orgánico y de Funcionamiento, repite el carácter preceptivo de nuestro dictamen en los supuestos de revisión de oficio de los actos administrativos y en los recursos administrativos de revisión.

Segundo

Improcedencia del recurso de revisión en el caso sometido a nuestra consideración

El recurso extraordinario de revisión viene regulado en los artículos 118 y 119 de la LPAC, y viene configurado como un recurso extraordinario que se da solamente contra resoluciones administrativas firmes o consentidas, pero fundándose, exclusivamente, en alguno de los motivos tasados y previstos en el artículo 118 de la Ley, en función de los cuales aparece la posibilidad de haberse dictado una resolución errónea e injusta.

En el caso sometido a nuestra consideración, la recurrente parece alegar el supuesto contemplado en el art. 118, apartado 1º de la citada ley (*“error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente”*), pues, como ya hemos dejado constancia en los Antecedentes de Hecho, a juicio de la recurrente, *“se ha cometido un **error** en la valoración de la discapacidad de esta parte, que se desprende de los propios documentos incorporados al expediente”*, documentos relativos a su estado de salud deficiente, que incluso ha motivado su declaración de incapacidad permanente absoluta por la jurisdicción social.

Sin embargo, este Consejo Consultivo entiende que no concurre el error de hecho requerido para la estimación del recurso extraordinario de revisión, como correctamente establece la Propuesta de resolución, informada favorablemente por los Servicios Jurídicos, argumentación a la que no es necesario añadir nuevas consideraciones.

Y es que los sistemas de reconocimiento de la capacidad y estado de salud, a los efectos de la protección de los interesados en el sistema de las *relaciones laborales* (bien en el específico de la capacidad para el trabajo por cuenta propia o ajena o el conexo de las prestaciones no contributivas, integradas en el sistema de servicios sociales por minusvalías o discapacidades, gestionado éste inicialmente por el Estado, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales, y luego por las Comunidades Autónomas) y en el sistema de la *dependencia*, no son homogéneos y comunicantes.

Partiendo de su consideración de instrumentos de protección, propios del Estado Social de Derecho, tienen finalidad distinta, razón por la que los requisitos exigidos en dichos sistemas son distintos y sus efectos, también son distintos. Aunque exista una cierta base común de coincidencia (el deficiente estado de salud) para dichos sistemas (el de las relaciones laborales, el de los servicios sociales y el de la dependencia) la finalidad tuitiva de unos y otros sectores son distintas y no debe considerarse que la *incapacidad permanente absoluta* para las relaciones laborales (con el consiguiente derecho a pensión de invalidez) supone que los efectos de ese reconocimiento operen automáticamente en el sector de la normativa de los servicios sociales (que tuvo sus propios criterios de valoración de la minusvalía) o en el de la dependencia.

No ha de extrañar, en consecuencia, que el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta para el trabajo opere exclusivamente en el ámbito laboral, con el consiguiente reconocimiento de la pensión de invalidez. La determinación del grado de minusvalía en el ámbito de los servicios sociales, tenía sus propios criterios de valoración y su reconocimiento, expresado en porcentaje (la interesada tenía reconocido el 33%, según consta en el Folio 2), tenía eficacia en el ámbito de los servicios sociales, tal como eran concebidos hasta la aprobación de la legislación de la dependencia. Mucho antes de la evolución que ésta ha supuesto, el art. 4.2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusválido, estableció que *“la calificación del grado de minusvalía que realicen los órganos técnicos competentes, a los que se refiere el artículo 8 de este Real Decreto, será independiente de las valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus competencias públicas”*, salvedad que en aquel momento era referible exclusivamente al régimen de la invalidez laboral.

La regulación del sistema de dependencia y la determinación de los correspondientes grados y niveles supone un paso más en la profundización del Estado Social de Derecho, máxime cuando se reconoce como un verdadero derecho subjetivo de los ciudadanos, si bien el título competencial, en el caso de las Comunidades Autónomas, sea el tradicional de los servicios sociales, razón por la que es discutible la competencia alegada por el Estado para regular esta materia, como hemos señalado en nuestros Dictámenes núms. 128/07 y 29 y 30/10.

En materia de dependencia, la normativa específica establece un sistema propio, con requisitos y grados específicos (lo que ha supuesto la derogación del Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre, acordada por el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril) y la dependencia

se reconoce según los baremos propios y, una vez reconocida, su eficacia es de aplicación progresiva, de acuerdo con el sistema de protección establecido en la Ley.

Por esa razón, aunque, en el caso de la reclamante, pueda parecer contradictorio al sentido común del ciudadano medio, esa diferenciación de requisitos, y la no comunicabilidad de los sistemas de reconocimiento, de la situación de discapacidad o deficiencias, a los efectos de las relaciones laborales, de los servicios sociales y de la dependencia, está plenamente ajustada a las normas aplicables en cada caso.

Ello es patente en el caso de la invalidez permanente absoluta, que despliega su eficacia en el ámbito de las relaciones laborales. Opera la no comunicabilidad de situaciones en el caso de los tradicionales servicios sociales y la situación de dependencia, si bien con algunas excepciones. En efecto, la Disposición Adicional Novena de la Ley 39/2006 establece que quienes tengan reconocida pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona según el Real Decreto 1871/1999, de 23 de diciembre, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia, en el grado y nivel que se disponga en el desarrollo reglamentario de esta Ley.

Así lo ha hecho el Real Decreto 504/2007 en su Disposición Adicional Primera en cuanto que reconoce a las personas que tengan reconocido el complemento de gran invalidez, la situación de dependencia, *“con el grado y nivel que se determine mediante la aplicación del baremo establecido en el artículo anterior, garantizando en todo caso el grado I dependencia moderada, nivel I”* (apartado 1); y, a las personas que tengan reconocido el complemento de la necesidad del concurso de otra persona, *“se les reconocerá el grado y nivel que corresponda, en función de la puntuación otorgada por el citado baremo”* (se refiere al de 1999) y continuarán disfrutando de todos los efectos jurídicos de dicho reconocimiento (apartados 2 y 3). Pero la referida comunicabilidad de las situaciones reconocidas en el sistema de servicios sociales respecto del sistema de dependencia, se limita a las citadas excepciones, no incluyendo, en consecuencia, al reconocimiento del grado de minusvalía del 33% de D^a I. G..

Por esta razón, no ha existido error de hecho en la valoración realizada por la Resolución de 14 de julio de 2009 y en consecuencia, procede desestimar el recurso extraordinario de revisión planteado contra el reconocimiento de la situación de dependencia **Grado I. Dependencia Moderada. Nivel 1.**

CONCLUSIONES

Única

Procede desestimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D^a I. G. H. contra la Resolución de 14 de julio de 2009, de la Directora General de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales, que reconoció a la interesada una situación de dependencia **Grado I. Dependencia Moderada. Nivel 1**, que fue ajustado a Derecho.

Este es el dictamen que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Joaquín Espert y Pérez-Caballero
Presidente

Antonio Fanlo Loras
Consejero

Pedro de Pablo Contreras
Consejero

José M^a Cid Monreal
Consejero

M^a del Carmen Ortiz Lallana
Consejera

Ignacio Granado Hijelmo
Letrado-Secretario General